

### III. Otras disposiciones

#### MINISTERIO DE JUSTICIA

**28842** REAL DECRETO 1506/1990, de 23 de noviembre, concediendo la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Nordo Dinar.

Visto el expediente incoado a instancia de don Nordo Dinar, en solicitud de que le sea concedida la nacionalidad española por carta de naturaleza; lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil, y cumplidos los trámites y requisitos establecidos, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de noviembre de 1990,

#### DISPONGO:

Artículo 1.º Se concede la nacionalidad española a don Nordo Dinar, hijo de Mesim y de Girsaya.

Art. 2.º La expresada concesión no producirá efectos hasta que el interesado se inscriba como español en el Registro Civil, previas las declaraciones legalmente exigidas y caducará si se dejan transcurrir ciento ochenta días desde la notificación sin cumplimentar estas condiciones.

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,  
ENRIQUE MUGICA HERZOG

**28843** ORDEN de 24 de octubre de 1990 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid dictada con fecha 10 de octubre de 1990, en el recurso contencioso-administrativo número 586/88 interpuesto por funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

En el recurso contencioso-administrativo número 586/88, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, entre funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, como demandantes, y la Administración General del Estado, como demandada, contra denegación presunta por silencio administrativo del Ministerio de Economía y Hacienda de la pretensión de que aplicase a los trienios devengados por los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias el coeficiente 2,6, se ha dictado con fecha 10 de octubre de 1990 sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue.

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo, debemos anular y anulamos por su disconformidad con el ordenamiento jurídico las Resoluciones de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 23 de octubre de 1987 y 25 de febrero de 1988, denegatorias de las pretensiones formuladas por don Primitivo García Viruega, don Ramón González Vargas, don Pedro Cano Sánchez, don José Manuel Corral Galache, don Constancio Zatarain Mayor, doña María Lourdes Hernández Hernández, doña María Dolores Blanco Prieto, doña Pilar S. Alejo Andrés, don Teodomiro Rodríguez Rodríguez, don Jesús Borrego Sánchez, don Carmelo González Sánchez, don Angel Martín Muñoz, doña Isabel Rodríguez González, don Nazario Vara Paz, don Miguel Rodríguez González, don Tomás González Gómez, don Miguel Ángel González Rosado, don Argimiro Ramos González, don Tomás Hernández Castilla, don Fernando Martín Sánchez y don Pedro López Fernández, a quienes reconocemos el derecho a percibir los trienios perfeccionados durante su permanencia en el Cuerpo Auxiliar de Instituciones Penitenciarias con arreglo al valor señalado para los del Cuerpo de Ayudantes, con abono de las diferencias devengadas a partir de los cinco años anteriores a la formulación por cada uno de ellos de su pretensión. No hacemos expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo

en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo previsto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de fecha 27 de diciembre de 1956.

Madrid, 24 de octubre de 1990.-P. D., el Subsecretario, Fernando Pastor López.

**28844** ORDEN de 15 de noviembre de 1990 por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Espes, a favor de don Carlos Franco de Espes y Mantecón.

Visto lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con los informes emitidos por la Diputación de la Grandeza de España y por la Subsecretaría de este Departamento y de acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Espes, a favor de don Carlos Franco de Espes y Mantecón, por fallecimiento de su padre, don José María Franco de Espes y Domínguez.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.  
Madrid, 15 de noviembre de 1990.

MUGICA HERZOG

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

**28845** ORDEN de 15 de noviembre de 1990 por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Salcedo-Bermejillo, a favor de doña Adela Corredor y Saavedra, por fallecimiento de su padre, don Cristino Corredor y Salcedo.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Salcedo-Bermejillo, a favor de doña Adela Corredor y Saavedra, por fallecimiento de su padre, don Cristino Corredor y Salcedo.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.  
Madrid, 15 de noviembre de 1990.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1990), el Subsecretario, Fernando Pastor López.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

#### MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

**28846** ORDEN de 4 de junio de 1990 por la que se dispone la ejecución de la sentencia de fecha 13 de marzo de 1989, del Tribunal Supremo, contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 30 de diciembre de 1987, por el concepto Impuesto sobre Sociedades, retenciones por intereses de Depósitos.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada el 13 de marzo de 1989 por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, interpuesto por la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada con fecha 30 de diciembre de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 26.291, que anuló la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central con fecha 25 de febrero de 1986, que

había declarado ajustada a Derecho la liquidación girada a la Hermandad Nacional de Previsión Social de Arquitectos Superiores, por el concepto de Impuesto sobre Sociedades, retenciones por intereses de Depósitos;

Resultando que el citado Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte dispositiva;

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105.1.a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Primero.—Desestima el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado.

Segundo.—Confirma la sentencia dictada con fecha 30 de diciembre de 1987 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 26.291/1986, que anuló la Resolución dictada con fecha 25 de febrero de 1986 por el Tribunal Económico-Administrativo Central, que había declarado procedentes las retenciones que por el concepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital habían sido practicadas a la Hermandad Nacional de Previsión Social de Arquitectos Superiores.

Tercero.—No hace pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las costas causadas en esta segunda instancia.»

Madrid, 4 de junio de 1990.—P. D., el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

**28847** *ORDEN de 22 de octubre de 1990 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 10 de octubre de 1989 por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 28.810, interpuesto por «Agromán Empresa Constructora, Sociedad Anónima», contra un acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 18 de junio de 1986, sobre retención por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas.*

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 10 de octubre de 1989, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 28.810, interpuesto por la Entidad «Agromán Empresa Constructora, Sociedad Anónima», contra un acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 18 de junio de 1986, sobre retención por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad «Agromán Empresa Constructora, Sociedad Anónima», contra un acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 18 de junio de 1986 —ya descrito en el primer fundamento de derecho de esta sentencia—, sobre retención por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, debemos declarar y declaramos tal acuerdo contrario a derecho, en cuanto deniega el reintegro de lo retenido y, en su consecuencia, lo anulamos en tal extremo y declaramos el derecho de la parte actora a que le sea devuelta la cantidad de 37.470 pesetas. Y sin costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 22 de octubre de 1990.—P. D., el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

**28848** *ORDEN de 7 de noviembre de 1990 sobre la resolución de solicitudes de proyectos, acogidos a la Ley 50/1985, sobre incentivos económicos regionales, correspondientes a 628 expedientes.*

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, constituye un nuevo instrumento para las actuaciones de ámbito estatal, dirigidas a fomentar las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas regiones del Estado, con objeto de repartir equilibradamente las actividades económicas dentro del mismo, y atribuye determinadas funciones al Ministerio de Economía y Hacienda, particularmente a la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales, creada por Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero.

En consecuencia con lo anterior, los Reales Decretos 487/1988, 488/1988, 489/1988, 490/1988, de 6 de mayo; 569/1988 y 570/1988, de

3 de junio; 652/1988, de 24 de junio; 1389/1988, de 18 de noviembre; 1129/1988 y 1130/1988, de 30 de septiembre; 883/1989, de 14 de julio, y 491/1988, de 6 de mayo, establecieron la delimitación de las Zonas de Promoción Económica de Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Melilla, Ceuta y Comunidad Valenciana y de la Zona Promocionable de Aragón, respectivamente, y fijaron las áreas prioritarias y los objetivos dentro de dichas áreas, así como los sectores promocionables y la naturaleza y cuantía máxima de los incentivos regionales que podrán concederse en dichas Zonas a los solicitantes que realicen proyectos de inversión y cumplan los requisitos exigidos en el Real Decreto 1535/1987 y en los propios Reales Decretos de delimitación.

Presentadas solicitudes empresariales para acogerse a estos incentivos regionales, y tramitadas las mismas de conformidad con la legislación que las afecta; vistas las propuestas de los Grupos de Trabajo previstos en el artículo 21 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, o, en su caso, las del Consejo Rector, al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto anteriormente citado y en la disposición final primera de la Orden de 17 de enero de 1989, he tenido a bien disponer:

Primero. *Solicitudes aceptadas.*—1. Quedan aceptadas las solicitudes de incentivos regionales presentadas para los proyectos de inversión que se relacionan en el anexo I de esta Orden.

2. Los incentivos regionales que se conceden, la inversión incentivable y los puestos de trabajo a crear son los que se indican en el citado anexo I.

Segundo. *Solicitudes desestimadas.*—Se desestiman las solicitudes de incentivos regionales presentadas por las Empresas y para los proyectos de inversión que se indican en el anexo II de esta Orden, por las causas que se indicarán en las correspondientes resoluciones individuales.

Tercero. *Condiciones modificadas.*—En el anexo III se relacionan los expedientes cuyas condiciones han sido modificadas, describiéndose la totalidad de los cambios autorizados en las correspondientes resoluciones individuales.

Cuarto. *Resoluciones individuales.*—1. La Dirección General de Incentivos Económicos Regionales notificará individualmente a las Empresas, a través del órgano competente de la Comunidad Autónoma, las condiciones generales, particulares y especiales que afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones individuales.

2. La resolución sobre concesión de beneficios que sea expedida por aplicación de lo dispuesto en la presente Orden no exime a las Empresas de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que, para la instalación o modificación de las industrias, exijan las disposiciones legales vigentes, nacionales o comunitarias, así como las ordenanzas municipales.

3. Los titulares de las subvenciones concedidas por la presente Orden quedan sujetos al cumplimiento de lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986, sobre justificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en la Orden de 25 de noviembre de 1987, sobre obligaciones frente a la Seguridad Social.

Quinto. *Disposiciones adicionales.*—1. Si fuera necesario, se autoriza a la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales a aumentar o disminuir hasta un 10 por 100 el importe de la subvención concedida, el de la inversión aprobada, o el número de puestos de trabajo.

2. Los bienes objeto de inversión incentivable se deberán adquirir por el beneficiario con pago al contado; en el caso de adquisición de bienes de equipo mediante fórmulas de pago aplazado o de arrendamiento financiero («leasing») aquellos deberán pasar a ser propiedad de las Empresas antes de la finalización del período de la concesión.

3. La materialización de la presente Orden, en relación con las subvenciones previstas en la misma, quedará condicionada a la existencia de crédito suficiente en el momento en que hayan de realizarse los pagos.

4. El abono de las subvenciones a que dé lugar la presente Orden quedará sometido a la tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondiente crédito cifrado en la sección 15 «Economía y Hacienda», concepto 23.724-C771 del vigente presupuesto, en el momento de presentarse la primera liquidación de subvención.

5. Los pagos resultantes de las certificaciones de subvenciones aprobadas tendrán el carácter de pagos a cuenta, sujetos a rectificaciones y sin que supongan en forma alguna aprobación y recepción de las inversiones que comprenda, estando obligado el beneficiario a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de los intereses legales correspondientes y del recargo, si procede, en que incurriera, si no se hubiera dado a la subvención el destino previsto, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delito fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.

Madrid, 7 de noviembre de 1990.—P. D., el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez Fernández.